

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 11° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-23147-2018  
CARATULADO : AGRICOLA ESMERALDA S.A/COMPAÑIA  
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, diecisiete de Julio de dos mil veinte

Santiago

Vistos

Ha comparecido Agrícola Esmeralda S.A., domiciliada en Av. Apoquindo N° 3000, oficina N° 1402, comuna de Las Condes y deduce demanda en contra de CGE Distribución S.A., domiciliado en Av. Presidente Riesco N° 5561, piso 14, comuna de Las Condes y solicita se condene a la demandada a pagar UF 68.381 a título de lucro cesante causado por las temporadas 2014 a 2018, correspondientes a las 30 hectáreas de paltos totalmente quemadas y a las 25 hectáreas dañadas; \$321.312.420 por concepto del costo del plan de reposición de las 25 hectáreas de plantaciones de paltos que resultaron dañadas por el incendio; haciendo reserva, conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil respecto del lucro cesante por las temporadas 2019-2020 a 2022-2023, tanto por las 30 hectáreas de paltos totalmente quemadas como por las 25 hectáreas dañadas que deben ser reemplazadas por nuevas plantaciones; en subsidio y para el caso en que no se conceda la reserva solicita el pago de UF 105.590 por concepto de indemnización del lucro cesante de las temporadas 2019-2020 a 2022-2023, tanto por las 30 hectáreas de paltos totalmente quemadas como por las 25 hectáreas dañadas que deben ser reemplazadas por nuevas plantaciones, más las costas de la causa.

Expone que su partes propietaria de un inmueble, en la comuna de Melipilla de aproximadamente 3.000 hectáreas, en el cual existe ya antena perteneciente a Entel Chile



«RIT»

Foja: 1

S.A., la cuales alimentada a través de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión y que es propiedad de la demandada.

Señala que el día 13 de febrero de 2011, aproximadamente a las 13:15 horas se inició un incendio en su propiedad, el que tuvo dos focos, uno en el portón de acceso a la antenna y el otro en el camino de servidumbre; fuego que se propagó, convirtiéndose en uno solo, el que duró varios días.

Con motivo del incendio su parte dedujo un juicio indemnizatorio, ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil de Melipilla, el que se tramitó bajo el Rol C-2353-2011, proceso en el que solicitó 2.507.580.000 por concepto de daño emergente, \$2.330.000.000 a título de lucro cesante, y \$400.000.000 por daño moral.

Precisa que el daño emergente se configuró por las pérdidas de plantaciones de eucaliptos, de paltos que se encontraban en plena producción, del sistema de riego, cercos y mallas, reparación de tuberías de riego, costo de contratación de trabajadores para extinguir el incendio y maquinaria para el retiro de escombros y árboles dañados; a su vez el lucro cesante se hizo consistir en *“pérdida de las legítimas ganancias que debían generar las 56 hectáreas de plantaciones de paltos en plena producción”, cuantificando la pérdida de capacidad productiva del predio de Agrícola Esmeralda en \$1.230.000.000 para el año 2011, \$550.000.000 para el año 2012, y \$550.000.000 para el año 2013”*.

En la sentencia de primer grado, de 17 de septiembre de 2014, se acogió la demanda, la cual fue confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel y en su oportunidad se desestimaron los recursos de nulidad deducidos por la demandada.

Se dejó asentado en el sentencia de primera instancia que la demandada es propietaria de la línea de alta tensión que abastecía a la antenna y que corte de la línea produjo el incendio; luego se estableció que se quemaron 330 hectáreas de bosque nativo, 140 de plantaciones de eucaliptus, y 30 hectáreas de plantaciones de palto en plena producción, de un total de 55 hectáreas, quedando las restantes 25 hectáreas de paltos dañadas parcialmente.



«RIT»

Foja: 1

En lo que importa a esta demanda señala que se quemaron totalmente 30 hectáreas de paltos en plena producción, de un total de 55; y se vieron afectadas parcialmente 25.

Respecto de los daños la referida sentencia expuso que *“sólo se ha logrado acreditar fehacientemente (i) el costo de las hectáreas de paltos quemados, como de los sistemas de regadío destruidos, (ii) los cercos y (iii) maquinaria arrendada para el posterior retiro de escombros en los montos indicados en el considerando DÉCIMO CUARTO, y en consecuencia, por el ítem de daño emergente sólo se logró acreditar la suma de \$861.322.450.-, y por lucro cesante la suma de \$468.163.869.-, desestimándose el daño moral por las razones indicadas en el considerando DÉCIMO QUINTO”*.

En cuanto al pago reseña que éste sólo se produjo en 12 de julio de 2017, retardo que le significó una prolongación del estado perjudicial, lo que en agricultura es especialmente dañoso.

Agrega que en existe el principio de reparación integral del daño, lo que se traduce en que de indemnizarse todo daño que sea consecuencia de un hecho ilícito, reparación que abarca lo patrimonial y lo extra patrimonial, ello a la luz de los artículos 1558 y 2329 del Código Civil.

Amparado en este principio es que su parte debe ser resarcida de aquellos perjuicios que ha continuado sufriendo producto de la conducta de la demandada y de la prolongación del estado perjudicial que ha sufrido.

Precisa que los daños que acá se demandan *“no fueron solicitados en la demanda iniciada por Agrícola Esmeralda el año 2011, y, por tanto, no fueron contemplados en la sentencia de primer grado ni en las sentencias de alzada. Son todos **daños provenientes del siniestro**, pero cuya producción fue posible por la innecesaria dilación de la indemnización por parte de la contraria”*.

Explica que el retardo en el pago de la indemnización agravó su situación ostensiblemente, lo que tradujo en que no recibió ganancias por la producción de paltas Hass durante las temporadas 2014-2018, replantar las 30 hectáreas que resultaron completamente quemadas, y, consecuentemente, aprovechar los frutos de aquella nueva



«RIT»

Foja: 1

plantación, a lo que se sumó el que no pudo recuperar el potencial de las hectáreas dañadas y aquel terreno que no pudo ser replantado.

Producto de lo anterior señala que su parte no pudo obtener ganancias por la producción de paltos desde el año 2014 al 2018, lo que se produjo por el pago tardío de la indemnización, pérdida que calcula, en base al informe pericial que acompaña, en la suma de UF 68.381

Afirma que también se estableció en la sentencia la existencia de 25 hectáreas afectadas, es decir, terrenos que resultaron afectadas en su capacidad productiva, capacidad que ni pudo ser revertida pues la demandada demoró en reparar los daños a los que fue condenada; agrega que no es exigible que su parte tuviese o contara con una provisión de fondos que le permitiera llevar adelante los trabajos agronómicos para recuperar 25 hectáreas, y al no tenerlo la degradación del predio, el que continuó deteriorándose.

La reparación del terreno importa no el terreno mismo, sino que también comprar nuevos paltos, generar la infraestructura (riego), todo lo cual importa un valor de plantación por hectárea es de US\$ 19.760, valor que aplicado al total de 25 hectáreas dañadas asciende a US\$ 494.000, suma que en pesos chilenos llega a \$321.312.420.

Añade que a consecuencia del retardo en el pago su parte no pudo llevar delante los trabajos y tratamientos adecuados necesarios para recuperar el potencial de plena producción de las 25 hectáreas; sólo a contar de la temporada 2023 – 2024 su parte se encontrará en situación de obtener los ingresos correspondientes a la explotación de las 30 hectáreas de paltas quemadas y a las 25 disminuidas.

Se trata de las pérdidas de utilidades netas de la producción de paltos por las temporadas 2019-2020 a 2022-2023, por lo cual realiza la reserva del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

La valoración de las pérdidas de utilidades netas para las temporadas 2019-2020 a 2022-2023 ascenderá, cuanto menos, a UF 60.500 para la superficie de las 30 hectáreas, y a UF 45.090 para la superficie de las 25 hectáreas, por lo que pide es al menos UF 105.590.



«RIT»

Foja: 1

Expone luego lo que ha sido la variación del precio de las paltas de una a otra temporada.

Posteriormente se refiere a los elementos de la acción de indemnización de perjuicios, identificando al hecho generador de la responsabilidad extracontractual y que es "el incendio iniciado el día 13 de febrero de 2011 dentro del predio de Agrícola Esmeralda, producto del inadecuado estado en que Emelectric mantenía sus propias instalaciones eléctricas", a lo que suma la demora de la contraria en reparar a su parte, dilación que, a su juicio, constituye un hecho dañoso e injustificado.

Dicho lo anterior señala que existe culpa de la demandada, a la luz de lo establecido en el artículo 139 de la Ley General de Servicios Eléctricos y 205 del Reglamento de la misma, sin perjuicio de señalar que el reproche ya constituye un hecho firma en la sentencia que ha sido reseñada; posteriormente agrega que un segundo aspecto del hecho dañoso lo constituye la injustificada prolongación del estado perjudicial de su parte, cuestión que queda claro en la condena en costas.

Afirma, posteriormente, que en el caso de autos es irrelevancia de la graduación de la culpa.

Acerca de la concurrencia del daño indemnizable precisa que da en las pérdidas de las utilidades que habría obtenido, la no reposición de la superficie de 25 hectáreas dañadas y la pérdida de las utilidades por las paltas no vendidas.

Refiere que en el caso de autos concurre la relación de causalidad pues los daños sufridos por su parte son la consecuencia necesaria y directa de la conducta culpable imputada a la demandada consistente en los hechos que derivaron en el incendio y la prolongación del estado perjudicial de dicha situación.

Pide en consecuencia lo ya referido.

Al comparecer CGE Distribución S.A. ha solicitado el rechazo de la demanda interpuesta en su contra, con costas.

En cuanto a los hechos señala que el 11 de octubre del año 2011, la demandante, Agrícola Esmeralda S.A. interpuso demanda de indemnización de perjuicios por



«RIT»

Foja: 1

responsabilidad extracontractual en contra de la Empresa Eléctrica EMEL S.A., basada en un incendio que tuvo lugar el 13 de febrero del año 2011, alrededor de las 13:15 horas en un inmueble de propiedad de la actora, demanda en la que solicitó por daño emergente \$2.434.580.000, a título de lucro cesante demandado \$2.200.000.000 y por concepto de daño moral \$400.000.000, proceso que se desarrolló ante el Juzgado de Letras de Melipilla, bajo el Rol N° 2353-2011, dictándose sentencia de primer grado el 17 de septiembre del año 2014, la cual fue apelada por ambas partes, siendo confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel el 25 de mayo de 2015, fallo que fue impugnado a través de recursos de casación, que ambas partes interpusieron para ante la Corte Suprema.

La Corte Suprema dictó fallo el 21 de marzo de 2017, disponiéndose el cúmplase el 7 de abril de 2017 y con fecha 28 de junio del mismo año su parte consignó la suma de \$1.856.453.926.

Añade que la demanda del año 2011 se funda en un incendio al interior de un predio de propiedad de la actora, el que resultó con daños, los cuales fueron identificados como destrucción del bosque nativo existente al interior del predio, destrucción de 400 hectáreas de plantaciones de eucaliptos, 40 hectáreas de palto en plena producción junto con sistemas de riego por goteo, todos los cercos del terreno, instalaciones de riego y reparación de 20 hectáreas de paltos remanentes, costo de contratación de mano de obra y materiales y retiro de escombros.

Luego el lucro cesante fue referido como la pérdida de las ganancias de las 56 hectáreas de paltos siniestrados calculadas hasta el año 2013.

Frente a la liquidación del crédito y dada la consignación realizada por su parte, los partícipes del proceso concordaron el pago de \$114.993.063, lo que fue realizado el 13 de septiembre de 2017.

Plantea que Agrícola Esmeralda S.A. ha vuelto a demandar sobre las consecuencias dañosas del incendio de 13 de febrero de 2011, pero ahora agrega diversos daños que avalúa en la suma de 68.381 UF por lucro cesante por temporadas



«RIT»

Foja: 1

2014-2018, \$321.312.420.- por costo de plan de reposición de 25 hectáreas de paltos y 105.590 UF por lucro cesante futuro de temporadas 2019-2020 a 2022-2023.

Dicho lo anterior asevera que lo expresado por la demandante constituye una confesión a la luz del artículo 1713 del Código Civil, para posteriormente señala que niega toda imputación a su respecto y agrega que en la acción ya ejercida se fijó si interés y el alcance del perjuicio sufrido, lo que lleva a señalar que los daños ya se encuentran reparados y que el lucro cesante no pudo haberse producido en este momento con el paso de tiempo.

Dicho lo anterior formula, como primera defensa la excepción de cosa juzgada, concurriendo en el caso los supuestos de los artículos 175 y 174 del Código de Procedimiento Civil, concurriendo la triple identidad del artículo 177 del mismo código.

La segunda excepción que se planea es la de prescripción de la acción desde la perspectiva de los artículos 2492, 2514 y 2332 del Código Civil, teniendo presente que desde la ocurrencia del hecho han transcurrido 7 años.

En tercer lugar plantea la inexistencia de los supuestos de responsabilidad extracontractual, precisa que su parte no ha incurrido en ilícito alguno y ello pues la parte demandante pretende circunscribir el hecho ilícito, en primer lugar, a los hechos afirmados en la sentencia de fecha 17 de septiembre del año 2014 que se encuentra firme y ejecutoriada. Dicho hecho ya fue sancionado por lo que respecto del mismo proceden las diversas instituciones jurídicas tendientes a dar seguridad y estabilidad a lo resuelto por la justicia, así como a tutelar los derechos fundamentales de las partes, en particular *non bis in ídem*; a lo que suma el que supuesto segundo ilícito –demora en el pago de la obligación- no es sino el ejercicio de su derecho a defensa, cuestión que incluso la misma contraria realiza desde que también recurre en contra de las sentencias de instancias.

Añade que en su conducta no existe culpa un menos dolo, como tampoco se da el vínculo causal.

En cuarto lugar alega la ocurrencia de caso fortuito como eximente de responsabilidad, pues si los daños no fueron previstos en su primera acción, mucho menos pudo haberlos previsto su parte.



«RIT»

Foja: 1

Como acápite posterior plantea la situación del artículo 2330 del Código Civil, para terminar cuestionando los perjuicios.

Se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos, para en su oportunidad citarse a las partes a oír sentencia.

**Con lo relacionado y considerando:**

**Primero:** Ha comparecido Agrícola Esmeralda S.A. y deduce demanda en contra de CGE Distribución S.A. solicitando se le condene a pagar UF 68.381 a título de lucro cesante causado por las temporadas 2014 a 2018, correspondientes a las 30 hectáreas de paltos totalmente quemadas y a las 25 hectáreas dañadas; \$321.312.420 por concepto del costo del plan de reposición de las 25 hectáreas de plantaciones de paltos que resultaron dañadas por el incendio; haciendo reserva, conforme al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil respecto del lucro cesante por las temporadas 2019-2020 a 2022-2023, tanto por las 30 hectáreas de paltos totalmente quemadas como por las 25 hectáreas dañadas que deben ser reemplazadas por nuevas plantaciones; en subsidio y para el caso en que no se conceda la reserva solicita el pago de UF 105.590 por concepto de indemnización del lucro cesante de las temporadas 2019-2020 a 2022-2023, tanto por las 30 hectáreas de paltos totalmente quemadas como por las 25 hectáreas dañadas que deben ser reemplazadas por nuevas plantaciones, más las costas de la causa, pretensiones que se fundan en los antecedentes de hecho y derecho que ya fueran reseñadas en la parte expositiva de la presente sentencia.

**Segundo:** Al comparecer CGE Distribución S.A. ha solicitado el rechazo de la demanda interpuesta en su contra, con costas, y lo hace en base a las alegaciones que ya fueran expuestas en la primera parte de esta sentencia.

**Tercero:** De lo expuesto por las partes es posible dejar asentado que no existe controversia acerca de los siguientes hechos:

- a. Con fecha 11 de octubre del año 2011 Agrícola Esmeralda S.A. interpuso demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de la Empresa Eléctrica EMEL S.A., proceso que se tramitó ante el Juzgado de Letras de Melipilla, bajo el Rol N° 2353-2011.





«RIT»

Foja: 1

- a. El día 17 de septiembre del año 2014 se dictó sentencia en el proceso Rol N° 2353-2011.
- b. Apelada que fue, por todas las partes la sentencia de primer grado, fue confirmada, con declaración, por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
- c. En contra de la decisión de la Corte de Apelaciones ambas partes recurrieron de nulidad formal y sustantiva para ante la Corte Suprema, la cual con fecha 21 de marzo de 2017 acoge el recurso de casación en el fondo deducido por Agrícola Esmeralda S.A. y dicta la consecuente sentencia de reemplazo.
- d. El 28 de junio de 2017 CGE Distribución S.A. consignó la suma \$1.856.453.926, girándose un cheque a nombre de Agrícola Esmeralda S.A. el de 13 de julio de 2017.

**Cuarto:** Las sentencias referidas adquieren importancia desde que los hechos asentados en ellas resultan inamovibles, lo mismo que sus conclusiones y decisiones.

**Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Melipilla.**

El fallo de primer grado en su reflexión octava señala que *“queda fehacientemente acreditado que el día 13 de febrero de 2011, poco antes de las 13.00 horas se produjo un incendio forestal en la comuna de Melipilla. Dicho siniestro, denominados “San Diego” de Agrícola Esmeralda, y “Cuncumén” por la CONAF, en atención al nombre de los lugares afectados, tuvo dos orígenes diversos los que al propagarse conformaron posteriormente un solo gran incendio, que demoró más de seis días extinguirse, no obstante la gran cantidad de recursos materiales y humanos movilizados, entre ellos helicópteros, aviones, bomberos y brigadas forestales, además de lugareños que concurrieron a extinguir el fuego que amenazaba sus propiedades. Según el Informe de CONAF, ya indicado, la causa de ambos incendios se debió al corte de cable eléctrico, con una superficie afectada estimada de 680 hectáreas, destruyéndose 120 ha. de pastizal, 90 ha. de matorral, 330 ha. de árboles nativos y 140 ha. de eucaliptus según la suma de hectáreas del mismo Informe. A lo anterior, indica la destrucción de paltos, cercos de malla, cercos de alambre, cañerías de riego y 7 animales (un toro, 2 gacelas y 4 aves exóticas), sin considerar la fauna nativa que un incendio forestal igualmente destruye. Igualmente, en*



«RIT»

Foja: 1

*base a dichos antecedentes, queda acreditado que el incendio forestal produjo daños en infraestructura y plantaciones de diversa magnitud en los predios afectados por el fuego”, hechos que son la base de la acción de Agrícola Esmeralda S.A. según se lee en el motivo tercero.*

*Y agrega la sentenciadora, respecto de los daños, que “las hectáreas de bosque nativo quemadas en el predio de la demandante alcanzaron a 330 hectáreas (...); las hectáreas de plantaciones de eucaliptus quemadas en el predio de la demandante alcanzaron a 140 hectáreas (...); las hectáreas de plantaciones de paltos quemadas en el predio (...) alcanzaron a 30 hectáreas, -de un total de 55-, en plena producción, la pérdida de producción de palta Hass y su correspondiente ingreso neto (descontados los costos de producción), y los costos asociados a la reparación del sistema de riego y manejos agronómicos de 25 hectáreas de palto dañadas parcialmente, para recuperar su potencial productivo, en un horizonte de 7 años contados desde el incendio (...); daños por destrucción de cercos malla bizcocho, malla verde enterrada, malla para corderos quemadas en el predio de la demandante alcanzaron a 15 kilómetros (...);perjuicios por concepto de retiro posterior de los escombros (...).”*

*Dado lo anterior es que acoge la demanda en los siguientes términos: “se condena a la demandada **EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A.**, a pagar a la demandante a título de indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente la suma única ascendente a \$861.322.450.-, por lucro cesante la suma de \$461.163.869.-, desestimándose el daño moral según se indicó, por la responsabilidad extracontractual que le cabe como concesionaria y propietaria de las líneas de alta tensión que cruzan el predio de la demandante “Agrícola Esmeralda S.A.” en la comuna de Melipilla, y que el día 13 de febrero de 2011 provocaron un incendio forestal causando daño a la actora”*

#### **Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.**

*Decide el Tribunal de alzada confirmar, con declaración, la sentencia apelada teniendo en consideración que “la destrucción de hectáreas de eucaliptos constituye un hecho cierto, no controvertido y el daño por la pérdida que se le ha ocasionado al demandante por ello, atendida la responsabilidad de la demandada en los hechos, debe*



«RIT»

Foja: 1

ser resarcida”, razón por la cual orden pagar por concepto de lucro cesante, gestado por el daño ocasionado en el bosque de eucaliptus la suma de \$ 112.500.000.

#### **Laudos emanados de la Corte Suprema.**

Conociendo del recurso de nulidad sustantivo deducido por Agrícola Esmeralda S.A. la Corte reflexiona señalando que *“frente al deber legal de indemnizar todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, contenido en el artículo 2329 del Código Civil y habiéndose establecido como hecho de la causa la destrucción de 330 hectáreas de bosque nativo a consecuencia del incendio imputable a la demandada, los sentenciadores estaban compelidos a analizar y ponderar el mérito de la prueba pericial y documental destinada a demostrar el monto de dicho perjuicio, de modo tal que al no hacerlo han infringido las normas legales que denuncia el recurrente, lo que amerita acoger el presente arbitrio de casación”*.

En la sentencia de reemplazo se expone, por parte del Tribunal Supremo que *“constituye un hecho de la causa que a raíz del incendio iniciado el 13 de febrero de 2011 en el predio de la demandante, ubicado en la comuna de Melipilla, por causas imputables a la demandada, se produjo la destrucción de 330 hectáreas de bosque nativo”* y agrega, luego de referir la obligación de reparar, que *“si bien no existen antecedentes específicos que permitan fijar una indemnización cercana a la propuesta en el informe pericial y en el documento del agrónomo Correa Torretti, sí resulta posible establecer un monto de acuerdo a los parámetros contenidos en la tabla de costos de Conaf, considerando al efecto que el daño que corresponde indemnizar cumple con las características de certeza y magnitud suficiente, las que justifican sobradamente su resarcibilidad”*, por lo que en lo resolutivo ordena pagar *“a la demandante las sumas de \$65.834.340 por el bosque nativo y \$112.500.000 por la plantación de eucaliptus, ambos a título de da o emergente”*.

**Quinto:** De lo establecido en el motivo precedente es posible constatar los hechos sobre los que versó el pleito y que fueron establecidos son aquellos acaecido a contar del día 13 de febrero de 2011, consistente en un incendio que afectó un inmueble propiedad de la demandante y que se tradujo en la destrucción de plantaciones e infraestructura que existía en dicho lugar.



«RIT»

Foja: 1

Eso en lo referido a hechos, pues en lo jurídico la controversia versó en la imputación que se hizo a la empresa Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A., hoy CGE Distribución S.A..

Como se dejó asentado precedentemente la demanda interpuesta por Agrícola Esmeralda S.A. fue acogida.

**Sexto:** El proceso, en tanto instrumento, tiene por objetivo la prestación jurisdiccional y por ello y dada la existencia de intereses contrapuestos, es que se exige que el juez realice un análisis de todas estas circunstancias y dentro de este amplio abanico de posibilidades, pruebas, y aspectos que deben ser considerados por el juez (Machado Martins, Priscila, “La Cosa Juzgada Material Secundum Eventum Probationis en la Acción Constitucional de Protección, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 46 N° 3, pp. 741 – 764, 2019); y para ello es que se opera en un doble ámbito, a saber, uno intelectual y otro material. Intelectual, pues la sentencia parte de una actividad racional que refleja la actividad de silogismo judicial. No obstante, la decisión también es una operación material donde la ley reglamenta el proceso y determina su desenvolvimiento.

El resultado no es sino, entonces, *“el método por el cual el juez forma juicio sobre los presupuestos que autorizan la decisión de mérito y sobre las pretensiones presentadas en el proceso, oriundas del conflicto de intereses, con el fin de decidir, utilizando para la formación de su convencimiento, la consideración, la valoración y el análisis de las pruebas y argumentos ofrecidos por las partes”* (Watanabe, Kazuo (1987): *Da cognição no processo* (São Paulo, Revista dos Tribunais, citado por Machado op. cit).

Lo anterior adquiere trascendencia pues dicho método se genera en un instrumento determinado, que como se señaló, no es otro que el proceso; y según el proceso en que se desarrolla la decisión tendrá mayor o menor grado de inamovilidad.

En efecto, la cognición será plena cuando en ella no se verifiquen restricciones al análisis de los elementos que integran el objeto de la misma, y ello ocurrirá en los procesos de lato conocimiento pues dichos procesos garantizan que la sentencia resolverá la cuestión sometida al órgano jurisdiccional del modo más completo posible.



«RIT»

Foja: 1

La sentencia será, entonces, la consecuencia de un amplio debate de las partes, en donde las partes sin más limitaciones que la ley ejercer su actividad probatoria.

En lo que importa a los efectos de este proceso es que la sentencia referida en el párrafo precedente genera cosa juzgada material, y es así pues pone término al diálogo de las partes por medio de un acto de autoridad, el que otorga certeza acerca de los hechos y sus consecuencias.

Al tiempo de decidir el asunto la sentencia ejerce una función endoprocesal, la cual refiere directamente al derecho de acción y defensa, puesto que el tribunal no puede motivar su decisión ignorando las pruebas producidas en el proceso.

Así entonces la decisión del tribunal se encuentra sujeta a la propuesta fáctica que hacen las partes, a las que luego de valorar las pruebas rendidas en el proceso se les adjudica una consecuencia a la luz del marco normativo aplicable, proceso que deber ser fundado.

Es esa es la razón por la cual una sentencia produce cosa juzgada, siendo ésta en definitiva la subordinación a los resultados del proceso por medio de la inmutabilidad y de la irrevocabilidad de la resolución judicial que resuelve sobre el fondo.

En palabras del Profesor Montero Aroca *“Lo que está en juego cuando se cuestiona la cosa juzgada es nada menos que la esencia de la jurisdicción, por cuanto ésta tiene la última palabra en la actuación del derecho objetivo en el caso concreto. La función jurisdiccional adquiere sentido porque la actuación del derecho se realiza en ella de modo estable. La seguridad jurídica exige que los resultados del proceso no puedan ser atacados. Sea cual fuere el momento en el que se logre el resultado del proceso, y ello dependerá de la conformación legal del mismo, la seguridad de las relaciones jurídicas materiales impone que después de él ese resultado se convierta en inatacable, de modo que lo que antes fue litigioso pasa a ser inmutable e indiscutible”*; ataque que por cierto puede adoptar diversas manifestaciones, entre ellas la presentación de una nueva acción que pretenda modificar la decisión ya adoptada, modificación que puede ser negativa o positiva, es decir, borrar los efectos de la decisión o extender los mismos.



«RIT»

Foja: 1

Es justamente el efecto negativo de la cosa juzgada el que impide o excluye nuevas decisiones jurisdiccionales futuras, entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma pretensión, efecto que toma el nombre de *non bis in ídem* y que debiera conducir a impedir la iniciación de un nuevo proceso sobre la misma pretensión; pero como la inadmisión no se encuentra reglada en el Código de Procedimiento Civil, lo correcto será verificar si concurren los supuestos de la cosa juzgada.

**Séptimo:** En este contexto nuestro Tribunal superior ha sostenido que *“en las condiciones anotadas, cuando se afirma que el sentido y efecto de cosa juzgada importa producir certeza de los derechos impidiendo un nuevo pronunciamiento sobre lo que fue juzgado, tal alusión se vincula ciertamente con la cosa juzgada material o sustancial, y es así como esta Corte en anteriores decisiones sobre la materia, ha asentado, en la misma dirección, que la cosa juzgada trae como consecuencia “el efecto de verdad jurídica indiscutible e inamovable que producen las sentencias firmes y ejecutoriadas”. Tal efecto, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, es propio de las sentencias definitivas o interlocutorias firmes, que producen la acción y la excepción de cosa juzgada. Sobre el particular, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo” y agrega “En relación a este punto, y distinguiendo entre cosa juzgada sustancial y formal el profesor Hugo Pereira Anabalón, en su obra “La Cosa Juzgada en el Proceso Civil”, página 108, ha indicado: “Constituye, entonces, la cosa juzgada sustancial el principio fundamental que solamente admite ruptura en los casos excepcionales previstos en la ley, que expresa de manera clara, patente o explícita lo contrario, en orden a permitir un nuevo proceso para debatir y resolver nuevamente el asunto ya juzgado. En suma la cosa juzgada formal es una excepción de aplicación restrictiva si la ley la dispone expresamente”. “En el mismo sentido se expresan los profesores Mario Mosquera Ruiz y Cristian Maturana Miquel, en el libro “Breves Nociones acerca la Cosa Juzgada”, página 61, al afirmar que: “La regla general en nuestro derecho corresponde a lo previsto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil en que las sentencias definitivas e interlocutorias firmes o ejecutoriadas producen cosa juzgada*



«RIT»

Foja: 1

*sustancial. Ello significa que todos esos fallos una vez ejecutoriados (Cosa Juzgada Formal), producen cosa juzgada sustancial, salvo que el legislador los hubiera excluido expresamente de esta clase de efectos". Se añade luego que: "En la cosa juzgada formal, existe siempre una disposición legal expresa en que se atenúa la inmutabilidad de fallo, permitiéndose su revisión en un proceso posterior".*

**Octavo:** Dicho y asentado lo anterior es que ha de recordarse que la actora ha sostenido que los daños que pretende se le resarzan provienen *del incendio iniciado el día 13 de febrero de 2011 dentro del predio de Agrícola Esmeralda, producto del inadecuado estado en que Emelectric mantenía sus propias instalaciones eléctricas*, a lo que suma la demora de la contraria en reparar a su parte, dilación que, a su juicio, constituye un hecho dañoso e injustificado (página 10 de la demanda, acápite III).

A su vez la acción del 2011 se base en los perjuicios sufridos a consecuencia del incendio del 13 de febrero.

**Noveno:** La constatación anterior evidencia que los daños que hoy se pretende sean resarcidos encuentran la misma causa que los litigados el 2011.

Claro, hoy se señala que existieron daños que no fueron indemnizados, sin embargo la razón de ello es doble, por un lado por falta de acreditación de los mismos, pues no debe olvidarse que en el proceso del Tribunal de Melipilla se litigó sobre la existencia de daño emergente y lucro cesante, y por otro, porque la actora no lo solicitó.

Siendo así concurre la excepción del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Conviene reseñar que no se trata de daños nuevos, sino sólo de ítems que no fueron probados y/o pedidos el 2011, resultando impertinente renovar la discusión sobre hechos que ya fueron juzgados.

**Décimo:** En lo que respecta a la segunda parte de la imputación, daño generado por el retardo en el pago, sólo baste decir dos cuestiones.

La primera es que fue la actora la que impugnó la sentencia para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel no sin malos resultados, pues ésta, como se dejó establecido



«RIT»

Foja: 1

aumento el monto a pagar; misma situación que sucedió con los recursos deducidos para ante la Corte Suprema.

En consecuencia no puede hoy criticarse el retardo cuando fue la misma demandante la que colaboró en él.

La segunda, una reflexión más banal, las reglas del juego, la parte que decide impugnar una sentencia asume el costo del tiempo.

**Undécimo:** Por lo razonado es que habrá de acogerse la excepción de cosa juzgada, omitiéndose pronunciamiento acerca de las otras alegaciones por resultar incompatibles.

**Duodécimo:** Habiendo sido totalmente vencida en costas, se condena en costas a la parte demandante.

Atendido lo antes razonado y lo establecido en los artículo 2314 del Código Civil y 177, 144, 140 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. Se rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta por Agrícola Esmeralda S.A. en contra de CGE Distribución S.A..
- II. Se condena a Agrícola Esmeralda S.A. al pago de las costas del juicio.

Regístrese y Notifíquese

Rol N° 23.147-2018

Pronunciada por Ricardo Núñez Videla, Juez Titular





«RIT»

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de Julio de dos mil veinte**

